

Acta de deliberación 396-2023

En Santiago a once de abril de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Esta sala después del debate de rigor, apreciando la prueba rendida bajo el sistema de la sana crítica ha arribado por la unanimidad de sus integrantes a las siguientes conclusiones:

Primero: Que como punto de partida ha de tenerse presente que este juicio dijo relación con la concreta participación que en los hechos contenidos en las acusaciones se imputa al encartado Tomás Pablo Rodríguez Soriano, en cuanto funcionario de Carabinero en el desempeño de sus funciones el día de los hechos, por lo cual, los reproches formulados a la institución a la que pertenece, que se evidenciaron en la etapa investigativa, sólo deben ser tenidos en consideración, en cuanto aquellos permitan fundar los elementos típicos de los delitos por los cuales precisamente se acusó a dicho imputado.

Que en tal sentido, la prueba principal del juicio, el video registrado a través de una de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Santiago, abarca desde minutos antes de la llegada del dispositivo policial dirigido por el acusado, hasta los instantes inmediatamente posteriores a la lesión sufrida por la víctima. El testimonio de ésta, y particularmente de otro civil, Matías Acuña Valencia, que grabó con su teléfono móvil a la herida cuando comenzaba a ser socorrida, además de las diversas fotografías exhibidas, permiten retratar que frente a los disturbios producidos en la intersección de las calles Alameda y Ramón Corbalán, el oficial a cargo del dispositivo policial, el acusado Rodríguez, utilizó la escopeta antidisturbios con munición "Super Sock" la que apuntó de manera horizontal en ángulo recto, en forma inmediata y en distintas direcciones en una suerte de maniobra disuasiva general con múltiples blancos a su disposición, en palabras de Acuña, estaban como locos, como en el juego en donde se "cazan patos". Rodríguez fue el único que en ese dispositivo portaba y utilizaba esa arma en contra de los manifestantes, civiles que incluso se acercaron a él directamente a encararlo tras los primeros disparos.

Rodríguez, además de la jefatura que ostentaba, tenía capacitación suficiente para conocer el empleo adecuado del arma y sus riesgos solo menos letales que las convencionales. Razón por la que se insistía durante la

instrucción en que se debía disparar hacia el tercio inferior del cuerpo del sujeto con la finalidad de golpearlo, e inmovilizarlo.

El propio acusado intentando exculparse indicó que realizó los disparos hacia abajo, al tercio medio inferior y sin perder la posición de tiro y preparando de manera inmediata, nuevamente efectuó un disparo hacia “estas personas” con la finalidad de poder reducir a una de ellas y lógicamente detenerla. Por cierto, no disparó hacia la zona inferior de los sujetos, ni hizo intentos por detener u ordenar hacerlo a persona alguna a la que dirigió los proyectiles, conforme pudo apreciarse claramente en los videos exhibidos. Tampoco consignó este uso repetido de la munición “antidisturbios” en los registros correspondientes, en contraste con el detalle que si efectuó al estampar -e incluso enmendar- el procedimiento inmediatamente anterior.

Ese último disparo, que se aprecia en la secuencia de video, fue el que terminó hiriendo a María Paz Grandjean a la altura de su rostro, por estar situada y erguida, a menos de 20 metros, en la línea de tiro en donde el capitán Rodríguez intentaba hacer blanco con un arma de fuego que por su naturaleza no es de precisión, conforme reiteradamente indicaron diversos testigos y peritos durante el juicio.

Que, en consecuencia, el tribunal tuvo por acreditados, a través de la prueba rendida y de los hechos que las partes establecieron como probados en la etapa intermedia que:

El capitán de Carabineros Tomás Rodríguez Soriano, el 18 de octubre de 2019, poco antes de las 19:53 horas, llegó la intersección de la Av. Alameda Libertador Bernardo O´Higgins con calle Doctor Ramón Corvalán a cargo de un dispositivo policial. A las 19:57 horas un manifestante se acercó corriendo para lanzar un objeto a los funcionarios, esa agresión fue respondida por Rodríguez Soriano disparando con la escopeta antidisturbios que portaba y percutando seguidamente un segundo tiro cuando el individuo se alejaba, impactando con el proyectil balístico “Super Sock” la cara de María Paz Grandjean. La distancia existente en ese instante entre González Soriano y Grandjean Cárdenas era de 16,24 metros.

A raíz de lo anterior María Paz Grandjean resultó con lesiones en su rostro consistentes en Trauma maxilofacial; hematoma malar y mandibular derecho; contusión maseterina, y herida en la región mandibular derecha de carácter menos grave.

Segundo: Que estos hechos se encuadran dentro de la figura típica del delito de apremios ilegítimos contemplado en el artículo 150 D del Código Penal, toda vez que el empleado público Tomás Rodríguez Soriano, incumpliendo los reglamentos respectivos, actuó en el ejercicio de sus funciones aplicando apremios ilegítimos, ya que infligió intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves que no constituyen tortura. En este delito corresponde responsabilidad a título de autor ejecutor al acusado Tomás Rodríguez Soriano de conformidad a lo establecido en el artículo 15 N°1 del mismo Código.

Tercero: Que para así decidirlo se ha tenido en cuenta la vinculación entre la conducta del imputado y el resultado lesivo en la víctima. Esta causalidad responde a los requisitos señalados en la teoría de la imputación objetiva del comportamiento que es la tesis que congrega mayor aceptación en la doctrina actualmente. A saber:

1. La calidad de empleado público del imputado. El capitán Rodríguez Soriano era un funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones al momento de los hechos, cuestión que incluso fluye de las convenciones probatorias acordadas por las partes.

2. El incumplimiento de reglamentos. Al efectuar el disparo con la escopeta antidisturbios impactando a la víctima contravino los reglamentos institucionales vigentes sobre uso de la fuerza y empleo de ese tipo de armamento. No se daban los supuestos de agresión activa o violencia que justificaran su uso defensivo. Además, ese disparo y los anteriores, que el capitán realizó en el mismo lugar y en contra de otros sujetos, no fue dirigido al tercio inferior de sus cuerpos, como evidencia el impacto en el rostro de la víctima que se encontraba inmediatamente detrás del individuo al que Rodríguez pretendía alcanzar.

3. El uso de esta medida de fuerza fue desproporcionado, innecesario e injustificado en el contexto en que se encontraba. Alcanzó con sus efectos a una persona que no representaba una amenaza, ya que si bien los videos exhibidos dan cuenta de la existencia de diversos manifestantes ubicados en la intersección de las calles Ramón Corbalán y Alameda, momentos antes de la llegada al lugar de la policía, lo cierto es que al momento en que se produce el disparo que hiere a la víctima, la escasa cantidad de personas y particularmente la de una de ellas que arroja una piedra en dirección a los

carabineros apostados en el lugar, no representaba una amenaza o nivel de peligro que habilitara al acusado a actuar como lo hizo

4. El imputado creó un riesgo jurídicamente desaprobado. Al disparar un arma de fuego en esas circunstancias (sin justificación, al tercio superior de una persona y poniendo en riesgo a terceros), el capitán Rodríguez creó un riesgo jurídicamente desaprobado para la integridad física de María Paz Grandjean, excediendo el riesgo permitido para el uso de ese armamento que, aun etiquetado como menos letal, puede ocasionar lesiones de importancia e incluso causar la muerte, tal como fue referido a propósito de la prueba rendida en juicio.

5. La realización del riesgo en el resultado. Ese riesgo creado por la conducta abusiva del imputado se materializó en las lesiones sufridas por la víctima (trauma maxilofacial, hematoma, contusión, herida), existiendo un nexo causal directo entre el disparo y dichas lesiones.

6. El resultado lesivo es abarcado por el fin de protección de la norma. Los apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos o degradantes que busca evitar el artículo 150 D del Código Penal incluyen claramente un disparo injustificado, a corta distancia, con un arma de fuego solo menos letal, dirigido contra la parte superior de las personas y aunque el golpe erró en el sujeto pasivo, cae dentro del ámbito de protección de dicha figura penal.

En relación a la faz subjetiva del referido ilícito, ha de tenerse en cuenta que el acusado actuó con dolo eventual respecto del resultado lesivo ocasionado a María Paz Grandjean, dada la corta distancia, la visibilidad que tenía de la presencia de terceros y la falta de justificación para el disparo, cuestión incluso reconocida por el acusado. El capitán Rodríguez debió representarse como altamente probable un resultado lesivo en el sujeto al que apuntó a su tercio superior con un arma de baja precisión y, por ende, que tal consecuencia también se podría producir en las otras personas a su alrededor, sin perjuicio de lo cual efectuó de todas maneras el disparo.

Que, por lo dicho, se desestima la pretensión de la acusadora particular representante de la víctima de calificar estos hechos como un concurso de delitos de tortura, lesiones simplemente graves y de disparos injustificados, atento el principio de especialidad de la tipicidad, en la cual no se subsume la conducta acreditada según la legislación penal vigente.

Que por la misma razón no se puede atender a la solicitud de la defensa de encasillar la acción del acusado como un cuasidelito de lesiones y

tampoco se considera atendible hacer lugar a su reclamo por la supuesta existencia de un vicio de congruencia en la acusación, pues se asila en elementos meramente accidentales de la descripción fáctica que no causan indefensión alguna.

Que en consecuencia **se condena como autor de un delito de apremios ilegítimos** en contra de María Paz Grandjean, contemplado en el artículo 150 D del Código Penal, en grado de consumado, al acusado Tomás Rodríguez Soriano.

La sentencia, que será redactada por el magistrado Cristian Soto Galdames, se dará a conocer en la audiencia que se realizará el miércoles 17 de abril a las 11:00 horas.

RIT 396-2023

RUC: 1910059482-2.

Dictada por la sala integrada por los jueces Erick Aravena Ibarra, Valeria Vega Sepúlveda y Cristián Soto Galdames.